

CUADERNOS DEL CLAEH n.º 96-97  
 Montevideo, 2.ª serie, año 31, 2008/1-2  
 ISSN 0797-6062 Pp. 223-231

## ARGENTINE DEMOCRACY: THE POLITICS OF INSTITUTIONAL WEAKNESS

Steven Levitsky y María Victoria Murillo (eds.)

University Park, Pennsylvania State University Press, 2005, 325 pp.

Uno de los académicos más destacados en política comparada, Adam Przeworski, no suele ser muy entusiasta de los estudios de caso. Su escepticismo no radica en la inutilidad en sí de reducir el número de unidades analizadas, sino en la precaución de utilizar esta estrategia para las situaciones adecuadas. Para Przeworski su uso debe estar fuertemente condicionado por el potencial explicativo que tienen las teorías más generales.<sup>1</sup>

La idea de que los estudios de caso son necesarios, bajo ciertas condiciones, resulta razonable. Una vez que ciertas unidades se desvían de las curvas trazadas a partir de nuestros modelos, parece necesario poner foco en la unidad, de forma de ver que está ocurriendo allí: ¿ese caso tiene variables adicionales no existentes en otros casos?; ¿las variables existentes

operan de forma distinta al resto de los casos? Puede ocurrir que un país pueda constituirse en un buen estudio de caso para cierta hipótesis específica. Sin embargo, uno puede llegar a pensar que no todos los países pueden ser buenos *case study* para todas las hipótesis relevantes en un área de investigación. Bueno, al menos, casi todos, salvo Argentina.<sup>2</sup>

Hay autores que van más allá y creen que este caso brinda la posibilidad de construir hipótesis y teorías novedosas sobre las secuencias que anteceden y que proceden a los problemas de debilidad institucional. Este es el motivo que impulsa esta serie de trabajos compilados en este libro *Argentine Democracy. The politics of institutional weakness*, editado por dos de los académicos más destacados en política comparada latinoamericana: Steven Levitsky y María Victoria Murillo. Los trabajos que integran este libro cubren distintas áreas de estudio: el sistema de partidos; la representación política; la relación entre poderes públicos; el vínculo entre la política federal y nacional; el proceso de políticas públicas; los movimientos sociales.

1 «I have nothing against studying cases. But I want to know what general hypotheses are relevant to the particular case studies [...] when you do case studies, you need to know where your case is located in the broader context of other cases. So, I say, "Do a regression before you do case studies. Then look at cases along the line first. After that, look at some outliers, because they may be illuminating about specific conditions"» (*Capitalism, democracy and science*, entrevista realizada por Gerardo Munck a Adam Przeworski el 24 de febrero de 2003, p. 57. Disponible en: <http://politics.as.nyu.edu/docs/IO/2800/munck.pdf>).

2 «Yet Argentina is a unique case. If one does, as I eventually did, regressions of various kinds for the whole world, you find that Argentina is always standard deviations out [...] when you start theorizing on the basis of Argentina you are going to get very little generality» (idem).

## Una breve síntesis de los trabajos

Tras la introducción y el capítulo 1, que intentan dar el marco conceptual del trabajo, en el capítulo 2, Pablo Spiller y Mariano Tomassi buscan explicar los ciclos de tipo *stop and go* que han caracterizado el patrón de crecimiento de la economía argentina. Para los autores, el problema no radica tanto en los contenidos de las reformas sino en los niveles de calidad del proceso de diseño e implementación de las políticas públicas. Estos problemas están referidos a dos dimensiones relevantes: la sustentabilidad y la estabilidad de las políticas. Mientras la primera afecta determinadas decisiones realizadas por los agentes (inversión, ahorro, formación de empleo) la segunda afecta la coordinación a nivel institucional en los procesos de toma de decisión. Esto da como resultado la ausencia de una arena institucionalizada en donde los agentes que participan en el *policy making process* (legisladores, autoridades nacionales y gobernadores) logren coordinar acuerdos intertemporales. A modo de ejemplo, los legisladores responden a sus líderes provinciales, atendiendo a agendas legislativas federales, sin una preocupación sistemática por temas de política económica nacional. A su vez, la puja por los fondos federales genera distorsiones en la asignación de recursos, lo que orienta a las autoridades nacionales a adoptar políticas fiscales rígidas que terminan afectando la flexibilidad macro-económica de la economía argentina. Estas secuencias perversas fueron agravadas por la ausencia de agentes capaces de cumplir la coordinación de estos procesos de política. La inexistencia de una burocracia pública central autónoma estuvo signada por años de inestabilidad política y colonización del estado por parte de gru-

pos de interés. Además, la inexistencia de un Poder Judicial autónomo redundó en la imposibilidad de contar con un poder público que pudiera garantizar el cumplimiento de las normas y procesos legales. Todo esto explica, según los autores, los altos niveles de volatilidad de la política pública argentina.

En el capítulo 3, Sebastián Etchemendy brinda una explicación, desde la economía política, del proceso de reformas de mercado durante los años noventa. Durante esta etapa, tanto grupos industriales domésticos como grupos sindicales organizados, recibieron compensaciones que les garantizaron su integración a la coalición reformista. En el sector empresarial, grupos industriales vinculados a la industria automotriz, el acero, petróleo y petroquímicos tuvieron beneficios diversos que les permitieron compensar los efectos de la pérdida de competitividad a partir de la política cambiaria y la apertura comercial. Estos grupos recibieron regímenes tarifarios especiales, así como la participación en la venta de los activos públicos. La selección de estos «ganadores» en el área empresarial estuvo condicionada por: el grado de permeabilidad de estos grupos de interés en la estructura estatal, la influencia de dicho sectores en la economía argentina (en términos de volúmenes de inversión), el nivel de organización de estos grupos, así como el grado de control de los mercados en los cuales se insertaban. En el área laboral, diversos grupos sindicales lograron beneficios directos como la participación activa en las empresas privatizadas, el control de fondos sociales o el mantenimiento del monopolio de la representación legal de la representación sindical. Los vínculos corporativos entre la CGT y el partido

gobernante (PJ) garantizaron que esas compensaciones estuvieran dirigidas a los grupos sindicales tradicionales localizados en el sector formalizado y organizado de la economía.

Según el autor, este proceso afectó la sustentabilidad de las políticas económicas desarrolladas. Las políticas de compensaciones generaron transferencias hacia mercados domésticos controlados, que viabilizaron las políticas de rigidez cambiaria y el endeudamiento externo. Una vez los recursos disponibles para las compensaciones comenzaron a agotarse, los precios relativos desventajosos y la baja capacidad de acceso a los mercados generaron presiones para alterar el tipo de cambio rígido. A su vez, la política de compensaciones también afectó la integración de los sectores populares. Estas fueron orientadas a grupos asalariados formalizados en detrimento de los sectores informatizados no organizados. Esto generó un aumento de la distancia a nivel del clivaje *insider/outsider*.

En el capítulo 4, Kent Eaton analiza la relación entre los gobiernos nacionales y federales en los noventa. La Argentina, pese a ser un país federal, tuvo durante buena parte del siglo xx un funcionamiento centralista. La adopción del MSI a partir de la crisis mundial de los años treinta implicó una concentración de las funciones de extracción y asignación fiscal por parte del Estado central. Tras la llegada de la democracia en 1983, Eaton identifica un cambio relevante en el vínculo entre las provincias y el gobierno nacional. Las provincias ganan autonomía política y logran incrementar el control sobre los fondos fiscales nacionales.

En este contexto se enmarcan los pactos fiscales y las leyes de copartici-

pación, lo que abre una nueva arena de negociación política al interior del Estado argentino. Es por este motivo que los gobiernos subnacionales pasan a tener un rol muy importante en el *policy making process*. Durante los años noventa, las autoridades provinciales influyen bajo dos formas importantes: por un lado, apoyando distintas reformas de mercado (privatizaciones, reformas sectoriales). La moneda de cambio para garantizar este apoyo fueron las transferencias fiscales federales. Por otro lado, los gobernadores actuaron como actores de veto por la vía de la representación parlamentaria, gracias al control que ejercen sobre los legisladores nacionales. Estos legisladores dependen de los líderes provinciales dado que son estos los que participan en el armado de las listas parlamentarias.

Este pacto entre instituciones estatales generó una fuerte rigidez fiscal que jaqueó la sustentabilidad del Estado nacional a fines de los años noventa. Las transferencias federales, en combinación con otras rigideces (como el tipo de cambio), afectaron negativamente la economía. Cuando el gobierno radical de De la Rúa, en minoría parlamentaria, intentó negociar con la mayoría de los gobernadores de extracción peronista las reglas de transferencia fiscal en el contexto de crisis económica, los incentivos de los líderes federales para alterar los acuerdos eran muy bajos. Como resultado, la debilidad del gobierno nacional en la negociación con las provincias fue un factor adicional para la crisis institucional desatada en el 2001.

En el capítulo 5, Mark Jones y Wonjae Hwang analizan la dinámica legislativa en la democracia Argentina durante los años noventa. La arena de negociación abierta entre gobierno nacional y líderes federales,

descrita en el capítulo anterior, relativiza la consideración del caso argentino como un neopopulismo presidencialista. Menem debió articular alianzas con estos agentes, como lo muestra el proceso de negociación con los gobernadores intercambiando apoyo para su programa de reformas a cambio de transferencias fiscales federales.

Ciertos incentivos electorales y recursos políticos permiten un importante grado de autonomía estratégica a los líderes provinciales. Por un lado, los gobernadores controlan las maquinas partidarias provinciales. Gran parte de los recursos fiscales provinciales son destinados a amplias redes de patronazgo, *pork barrell* y actividades clientelares en donde se aseguran lealtades partidarias. Por otro lado, el sistema electoral asegura una alta discrecionalidad para la elección de los legisladores. Esta discrecionalidad, como lo muestra el capítulo de Eaton le permite a los gobernadores controlar la designación de los legisladores, con los importantes efectos que esto tiene en términos de producción de agenda parlamentaria federal. Sin embargo, hay una arena de *policy* de carácter nacional que tiene baja visibilidad para estos agentes, lo que brinda al gobierno nacional una mayor autonomía para su diseño e implementación. Es esta la arena en donde existe una concentración institucional del ejecutivo, explicada por los bajos incentivos que tienen los líderes provinciales para intervenir en ella.

En el capítulo 6, Gretchen Helmke analiza las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Argentina ha legado una intervención permanente del poder político sobre las instituciones judiciales. Durante la década del noventa, el caso argentino fue destacado por el permanente control que ejerció el gobierno de Menem

sobre la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, la autora manifiesta que esta relación de cooperación informal es un poco más compleja de lo que parece. La ausencia de independencia del poder judicial no solo puede implicar la cooperación de un poder sobre el otro, sino que puede producir paradójicamente, conductas de desafección. En este último sentido, las posibilidades de intervención e influencia del Poder Ejecutivo pueden generar mejores condiciones para que el Poder Judicial vaya en contra del Ejecutivo. La conducta de desafección estratégica que caracterizó al funcionamiento del Poder Judicial durante parte de la década del noventa implicó la activación de ciertas conductas estratégicas que también implicaron una ausencia de imparcialidad de los jueces.

Bajo el gobierno de De la Rúa, la señal dada por el gobierno de no alterar la integración de la Suprema Corte generó condiciones para desestimular las conductas estratégicas de la Corte. Ni los jueces tuvieron que demostrar su independencia con el gobierno, ni el gobierno exigió conductas de cooperación de los jueces. La situación fue bastante distinta en el gobierno de Duhalde. El contexto de descreimiento hacia la Suprema Corte, impulsó la intención del nuevo presidente de reestructurar el órgano. Esta amenaza, activo los mecanismos de conducta estratégica por parte de la Suprema Corte. El fallo constitucional de inconstitucionalidad del *corralito*, ante la presentación de los recursos de amparo de los ahorristas, fue una de las herramientas políticas utilizadas por el órgano judicial para evitar el embate político del Ejecutivo. El nuevo gobierno de Kirchner, bajo un contexto económico favorable, reestructuró la integración de miembros de la Corte apelando a una integración no intervenida del órgano, lo

que dio amplia legitimidad pública. Esto, al menos de forma momentánea, parece haber debilitado los mecanismos de acción estratégica de la Corte sobre el Ejecutivo.

Los capítulos 7 y 10 están dedicados a analizar la crisis de representación de las instituciones políticas. Tanto Juan Carlos Torre como Enrique Peruzzotti caracterizan la emergencia post dictadura de un segmento de ciudadanos insatisfechos con el funcionamiento de las instituciones políticas. Ambos autores muestran como los partidos que integran a los sectores medios y altos (UCR, FREPASO, Acción por la República) han mostrado niveles importantes de volatilidad electoral, lo que indica los vínculos fluidos que tienen estos sectores con las ofertas partidarias existentes. A su vez otro indicador de este proceso ha sido la activación de distintos movimientos de acción colectiva, autónomos de los partidos, centrados en nuevos *issues*: derechos humanos, corrupción, medio ambiente, seguridad pública. Por un lado este proceso de desafección ciudadana ha redundado en un sistema de partidos de corte hegemónico dominado por el Partido Justicialista (PJ), a partir de sus enlaces estables con los sectores populares (Torre, cap. 7), mientras estos sectores se insertan en movimientos de opinión pública fluidos e intentan ejercer formas de «*accountability social*» (Peruzzotti, cap. 10).

En el capítulo 8, Levitsky caracteriza al PJ como organización política. El peronismo tiene una combinación un tanto paradójica: fortaleza organizacional y una débil institucionalización partidaria. La primera característica esta dada por los fuertes vínculos que tiene con sectores populares. El PJ dispone de amplias redes organizacionales que intermedian su conexión con sectores trabajadores informales, desorganizados

y con las corporaciones sindicales organizadas. Esto sectores constituyen bases electorales sumamente estables para el peronismo. La segunda característica es la existencia de normas procedimentales y reglas de funcionamiento flexibles. Esto último genera determinadas dinámicas organizacionales. Por un lado, la alta informalidad institucional genera la concentración de poder en aquellos líderes que logran hacerse con cargos ejecutivos *vis a vis* la estructura organizacional interna. Por otro lado, esa misma flexibilidad interna permite que estos liderazgos asciendan fluidamente al interior del PJ, logrando acceder a posiciones jerárquicas del movimiento. En tercer lugar, este mismo patrón de funcionamiento ha influido sobre el vínculo bajamente institucionalizado que ha tenido el PJ con el movimiento sindical. Los criterios de representación orgánica de los sindicatos dentro del partido rara vez han sido respetados.

Como resultado, el PJ ha sido un partido con una importante capacidad de adaptación a nuevos contextos, como fue la transición al modelo de mercado, y los cambios en sus bases sociales tras la reducción del movimiento sindical organizado. Este proceso de adaptación estuvo dado por tres acciones organizacionales relevantes que fue capaz de activar el PJ bajo el Menemismo: desmontar mecanismos de participación laboral orgánica de los sectores trabajadores organizados; la capacidad de vincularse con nuevas bases como los sectores altos beneficiados por las políticas de mercado; y la capacidad de reestablecer los vínculos con los sectores populares desorganizados, bajo la modalidad de *party machine*.

Estas características organizacionales si bien permitieron el *policy switches* en

los años noventa, generaron problemas de cohesión interna y estabilidad institucional que recrudecieron los problemas del sistema de partidos argentino. La salida del gobierno de Menem transfirió el poder político del PJ a múltiples gobernadores provinciales con intereses divergentes y sin coordinación institucional. Los interinatos presidenciales luego de la caída de De la Rúa reflejaron esta lucha de poder interna entre los líderes provinciales por el control del gobierno y por extensión de la jefatura del propio PJ. La misma situación de baja cooperación política intrapartidaria ocurrió luego de la asunción de Duhalde, quien debió integrar su gabinete presidencial con dirigentes provenientes de su distrito, la provincia de Buenos Aires. Esta etapa de alta fluidez interna permitió que el peronismo, una vez más, recompusiera su orientación programática: se decidió renegociar la deuda pública, y se adoptaron políticas macroeconómicas más flexibles y heterodoxas. La victoria electoral de Kirchner fue producto de esta etapa de alta fluidez partidaria interna garantizada por la flexibilidad orgánica del PJ. Tras la victoria electoral, Kirchner aprovechó este mismo escenario para ganar autonomía política, recomponiendo alianzas con grupos nuevos (movimientos de derechos humanos, elites intelectuales) y viejos (líderes provinciales, fracciones internas del PJ) así como profundizando la orientación programática de corte neoestatista.

En el capítulo 9, Ernesto Calvo y Victoria Murillo plantean una nueva «ley de hierro» en la democracia argentina post dictadura: si bien los partidos no peronistas pueden ganar elecciones, son incapaces de mantenerse en el gobierno. Desde el 1983, los dos gobiernos radicales elegidos (Alfonsín y De la Rúa) no pudieron culminar sus mandatos, mientras todos los

gobiernos peronistas si pudieron hacerlo. La pregunta que intentan contestar los autores es cuales son los mecanismos que le dan al peronismo una ventaja comparativa para garantizar la estabilidad de sus gobiernos. Para Calvo y Murillo dos son los factores que explican esto: el control del poder provincial que le garantiza al peronismo tener mayorías parlamentarias; y la capacidad de usar redes de patronazgo de forma efectiva que le permiten controlar la movilización social.

Respecto al control provincial, desde el retorno de la democracia el peronismo siempre ha contado con mayorías en la cámara alta, y en más de la mitad del período con mayorías también en la cámara baja. El peronismo fue favorecido por las reglas electorales que sobrerrepresentan en la distribución de bancas a las provincias menos pobladas, allí donde el PJ se constituye en mucho de los casos en el partido hegemónico. En relación al acceso a recursos de patronazgo, las leyes de transferencia fiscal también parecen haber favorecido a las provincias peronistas. La evidencia demuestra las provincias peronistas logran un mayor acceso a recursos fiscales federales, además de realizar un uso más efectivo de los mismos.

En el capítulo 11, Javier Auyero realiza un trabajo de corte etnográfico sobre las nuevas formas de protesta social que emergen en Argentina a mediados de los años noventa. Un rasgo característico de esta protesta es la aparición de nuevas formas de acción colectiva en la respuesta violenta organizada: el ataque a edificios públicos, el corte de rutas, el campamento en plazas, la demandas invasivas a comercios para la repartición de alimentos. Es de desatacar, sin embargo, que para Auyero estos eventos de protesta tienen

continuidades con las estructuras de intermediación política. Dos características relevantes aparecen en las narraciones de los cuatro eventos que reconstruye el autor a partir de diversos testimonios: la influencia de las redes clientelares en la generación y sostenimiento de estas protestas; y la activa participación de elites partidarias que opuestas a políticas de estado puntuales, canalizan y estimulan la protesta social. Los eventos analizados son el saqueo de supermercados en provincia de Buenos Aires en el 2001, la ocupación de la plaza principal de Corrientes en 1999, el corte de rutas en Neuquén en 1996, y la invasión de edificios públicos en Santiago del Estero en 1993.

En las conclusiones finales, Levitsky y Murillo discuten el concepto de debilidad institucional. A la luz de los debates sobre instituciones en regímenes de gobierno, los autores argumentan que el caso argentino resulta de suma utilidad para testear y generar hipótesis no existentes en otras áreas de debate en donde estos enfoques son utilizados recurrentemente, como en *American Politics*.

Las instituciones pueden ser analizadas en dos dimensiones relevantes: en los niveles de aplicación y en los niveles de estabilidad. Por este motivo no existe un único patrón de debilidad institucional: hay instituciones que pueden ser estables, pero no ser acatadas por los agentes; de forma contraria hay instituciones que pueden ser acatadas pero sufren de inestabilidad. Finalmente, puede haber instituciones que sea poco acatadas y además inestables. Los autores muestran que hay diversas instituciones argentinas que entran en distintos «casilleros» de la tipología. Las reglas electorales si bien han sido efectivas en su acatamiento, han

sido poco estables, dado las continuas interrupciones autoritarias y los cambios constitucionales recurrentes; las leyes jurídicas si bien han tenido continuidad en el tiempo, han sido poco efectivas en sancionar agentes o orientar las conductas de elites políticas o económicas; finalmente el mandato presidencial ha sido inestable durante todo el siglo xx además de poco acatado por grupos organizados como los militares, ciertos movimientos sociales o los propios partidos políticos.

Las consecuencias de la debilidad institucional son varias. El primero son los problemas de coordinación entre distintos agentes tanto en la arena política como económica: las crisis políticas recurrentes, así como los problemas de consistencia de política reflejan los problemas que tiene Argentina para lograr la cooperación a largo plazo. El segundo, refiere a los incentivos que tienen los agentes, a partir de la alta incertidumbre institucional, de adoptar políticas rígidas de forma de hacer viable la acción estratégica. Este «hiper compromiso» —sin embargo— genera poca flexibilidad a nivel de políticas, lo que termina generando externalidades negativas hacia otras áreas. La convertibilidad y sus efectos sobre la competitividad de la economía son un ejemplo cabal de este problema. El tercero refiere a la fluidez institucional que estos contextos pueden generar. La alta incertidumbre que tienen los agentes expande el rango de opciones disponibles para actuar. Esto parece clave para interpretar la alta flexibilidad que tiene el peronismo para adaptarse como organización a nuevos contextos. El cuarto refiere a los incentivos que tienen los agentes para seguir canales informales para el logro de metas. Las conductas de desafección estratégica del Poder Judicial refieren a este aspecto, así

como el rol creciente de las nuevas formas de «accountability social».

Los autores cierran este capítulo discutiendo los orígenes de la debilidad institucional en Argentina. Por un lado, instituciones fuertes y estables requieren de la capacidad y la intención inicial de ciertos agentes de construir instituciones formales que tengan estas características. Además, estas capacidades no son desarrolladas en la medida en que las instituciones no logran ser mantenidas. Por este motivo resulta más racional generar capacidades para poder actuar en contextos de incertidumbre institucional lo que refuerza la propia debilidad de las instituciones. Hasta aquí, parece que la explicación resulta endógena, lo que no permite responder efectivamente cual es el origen de la debilidad institucional. El salto que intenta romper con esta circularidad explicativa esta dada por la existencia de una coyuntura crítica. La etapa de incorporación de los sectores populares a la arena política después de la gran depresión de los años treinta, modeló las expectativas de los actores acerca de la posibilidad de tener instituciones estables y efectivas. A partir de allí distintos agentes organizados invirtieron en capacidades para operar estratégicamente en un contexto de alta inestabilidad institucional. Esto se ha mantenido en el tiempo, salvo una arena en donde si hubo cambios significativos: la adopción de las reglas de la democracia como *the only game in town*.

### A modo de cierre

El presente libro se constituye en una de las referencias más relevantes para entender la política argentina. La variedad de enfoques y el rigor analítico de la mayoría de los trabajos garantiza su aporte tanto en inves-

tigaciones que procuran testear hipótesis, como en trabajos que pretendan de forma exploratoria reformular teoría referida al caso argentino. El libro también muestra la existencia de una corriente de comparativistas formados en la academia norteamericana capaces de integrar la discusión sobre política latinoamericana con aportes teóricos y metodológicos provenientes de la ciencia política formalizada. Esto brinda una ventana de oportunidades importante para expandir su influencia sobre mucha de la producción más ensayística proveniente de la región. Al menos, enfrenta a esta forma de producción académica a la necesidad de asumir la existencia de estos trabajos como una referencia con la cual discutir, ya sea para aceptar como para refutar evidencia o enfoques.

Una última cuestión refiere a los objetivos iniciales de los editores. Siguiendo el argumento de Przeworski, pedirle al *case study* aportes a teorías generales sería olvidarse de sus características intrínsecas. Sin embargo, los propios editores creen que Przeworski subestima las posibilidades de considerar el caso argentino como un caso teóricamente relevante (Levitsky-Murillo, p. 16). El punto en discusión sobre si el caso argentino puede ser útil para construir teoría o hipótesis generalizables debe centrarse en su carácter de excepcionalidad o no. Dicho en términos más simples: si el caso argentino aporta a regularidades causales, capaces de ser expandidas a otros casos, entonces el caso argentino deja de ser excepcional. Y eso es algo en lo que quizás Przeworski no estaría de acuerdo. El punto medular de la discusión es si los autores logran demostrar precisamente que Argentina no es un caso excepcional. Y eso no parece tan claro en el argumento. A la vez que los autores entroncan este trabajo con la tra-

dición de trabajos que han sido calificados como sólidos estudios de caso,<sup>3</sup> niegan el tratamiento del caso argentino como un caso excepcional (Levitsky-Murillo, p. 14). Aquí es donde uno comienza a sospechar que esta discusión va un poco más lejos, y esta ligada a debates metodológicos cruzados entre los estudios *cross country* y los *case study*, respecto a las posibilidades de imputar uniformidad causal a las unidades estudiadas («falacia universalista»), o considerar a cada unidad como un caso único e irrepetible de combinación de variables («falacia particularista»).

Finalmente, otra cuestión relevante es establecer de forma más precisa las áreas en que este caso realiza aportes relevantes para nuevas teorías sobre instituciones y las áreas en donde la innovación no se produce. Quizás, ese sea el salto definitivo de este trabajo para pasar de ser una excelente compilación de artículos orientados bajo enfoques diversos, a constituirse en un trabajo que procura articular de forma consistente un nuevo enfoque para el estudio sobre instituciones en política comparada.

Pablo Alegre

---

3 La referencia esta referida a los trabajos de Guillermo O'Donnell sobre los regímenes burocrático-autoritarios.